



CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL

2º CONGRESO MUNDIAL

Vancouver, 21-25 de junio de 2010

RESOLUCIÓN**SOBRE****CAMBIAR LA GLOBALIZACIÓN**

1. El Congreso manifiesta su profunda preocupación ante la profundidad y la persistencia sin precedentes de la crisis económica mundial. Decenas de millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, víctimas inocentes de esta crisis, han perdido sus puestos de trabajo y sus ingresos. Los trabajadores están indignados por las causas de la crisis y tienen una profunda sensación de injusticia ante los enormes sufrimientos que está ocasionando. Se trata de una crisis provocada por la codicia y la incompetencia del sector financiero, apoyándose en los dogmas fundamentalistas de libre mercado de las décadas precedentes. Se trata de una crisis provocada por la creciente desigualdad en la distribución de la renta y una erosión considerable de la proporción del salario en los ingresos nacionales, acompañadas de reducciones salariales relativas, un aumento de la flexibilidad laboral y la inseguridad, una reducción de la protección social y un debilitamiento en la aportación de servicios públicos. Se trata de una crisis provocada por un modelo de crecimiento que ocasiona el deterioro del medio ambiente alterando las condiciones de habitabilidad del planeta. El Congreso rechaza el modelo neoliberal, considerándolo desacreditado y contrario a los trabajadores y a los pobres y exige que se tomen medidas para prevenir que se repita y para cambiar de manera fundamental la globalización.

2. La prioridad inmediata es una acción considerablemente más intensa, coordinada a escala internacional, que apunte a la creación de empleo decente y sostenible y a salvaguardar los empleos existentes, garantizar una protección social adecuada, incrementar los salarios y el poder adquisitivo, erradicar la pobreza y la inseguridad, establecer y reforzar los servicios públicos, promover la educación para todos, la formación profesional y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y revertir el aumento de la desigualdad de ingresos. Los Gobiernos deben hacer todo lo posible para garantizar la implementación del Pacto Mundial para el Empleo de la OIT. Tienen que invertir en Empleos Verdes, centrándose en estrategias para una 'transición justa', que representan un elemento crucial para lograr compromisos vinculantes encaminados a combatir el cambio climático. Deben aportar prestaciones de desempleo adecuadas y rechazar cualquier "estrategia de salida" que implique recortes presupuestarios a gran escala basados en una disminución de los servicios públicos y una reducción de la seguridad social. Deben re-regular el sistema financiero con la mayor urgencia y ampliar la base impositiva mediante una reforma fiscal progresiva de manera que todos los ingresos sean fiscalizados de forma justa. El Congreso pide la introducción de impuestos, como por ejemplo un impuesto global sobre las transacciones financieras y sobre las transacciones de divisas, que aborde los múltiples retos de la globalización, sirviendo al mismo tiempo para desalentar los movimientos especulativos de capital a gran escala e incrementar la renta pública necesaria urgentemente para cubrir prioridades sociales, medioambientales y de desarrollo.

3. Más allá de la crisis, el Congreso compromete a la CSI a asegurarse de que no se vuelva a la situación previa ‘como si nada hubiera pasado’. Apoya una nueva vía para lograr un desarrollo económico que resulte eficiente económicamente, socialmente justo y sostenible medioambientalmente e insta a la CSI y a sus afiliadas, trabajando en estrecha colaboración con TUAC y con los demás asociados en la Agrupación Global Unions, a movilizarse para cambiar fundamentalmente la economía mundial de manera que garantice el respeto universal de los derechos humanos, incluyendo los derechos de los trabajadores/as, la igualdad de género, un desarrollo sostenible que genere trabajo decente para todos y que acabe con la pobreza, y la cancelación de la deuda de los países menos adelantados sin imponer condicionalidades de política económica. Esta nueva vía ha de reequilibrar la economía: los derechos de los trabajadores y del capital; las mujeres y los hombres; la economía real y la financiera; y los países industrializados y los países en desarrollo, por medio de un pacto global de co-desarrollo. Debe poner fin a los abusos corporativos y a la codicia, incluyendo las remuneraciones excesivas de directivos y agentes financieros, el recurso a los paraísos fiscales, la presión a la baja respecto a las condiciones de trabajo, la precarización del empleo y la transferencia de operaciones para eludir la regulación y evitar la mano de obra sindicalizada. Sobre todo, debe poner fin a las políticas que han generado enormes desigualdades tanto entre los países como dentro de cada nación en el transcurso de las dos últimas décadas. Esto requiere un cambio de paradigma en el establecimiento de políticas, que “sitúe a las personas en primer término”.

4. La crisis económica ha puesto claramente de manifiesto la creciente dependencia mutua de los países y de los pueblos como resultado de la globalización. Ha demostrado asimismo los límites y las debilidades del actual sistema de gobernanza mundial. Un nuevo modelo de globalización debe afirmar los principios de la justicia económica mundial, la solidaridad humana y la democratización de las relaciones de poder globales. El Congreso exige una reforma fundamental en la gobernanza interna de las organizaciones intergubernamentales, especialmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC), para mejorar la representación de los países en desarrollo y garantizar plenamente la democracia, la transparencia y el mantenimiento de consultas en sus procesos de toma de decisiones. Los trabajadores y trabajadoras deben sentarse a la mesa de negociación mediante el establecimiento de estructuras formales consultivas para los sindicatos. Se requiere una revisión del mandato y los objetivos del FMI y el Banco Mundial. La ideología neoliberal de esas organizaciones fue en gran parte responsable del aumento del desempleo y la pobreza, el declive de los servicios públicos y el aumento de las desigualdades de ingresos que desembocaron en la crisis, y tales políticas han de quedar definitivamente descartadas. En lugar de cambios puramente retóricos, estas instituciones deben adoptar un enfoque totalmente nuevo basado en un genuino compromiso a la justicia social y una mayor cooperación internacional, integrando un papel destacado de la OIT y los valores sociales para cuya defensa fue establecida dicha organización, en lugar de imponer la condicionalidad de la política económica. Deben controlar y prevenir la especulación financiera y poner fin a la fuga de capital, particularmente de los países más pobres.

5. La coherencia política internacional debe fundamentarse en la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social de 2008 y ponerse al servicio de un desarrollo sostenible y socialmente equilibrado de la economía mundial. Debe finalizarse una carta global para promover una actividad económica sostenible, que incorpore un capítulo sustantivo sobre las normas de la OIT y el Programa de Trabajo Decente de la OIT, y que cuente con un mecanismo efectivo para su aplicación. Los países del G20 deben desarrollar vínculos genuinos con los procesos representativos en las Naciones Unidas, de manera que los intereses de la población de todos los países en el mundo entero sean tenidos en cuenta,

en una nueva e inclusiva arquitectura económica mundial, junto con la creación de un Consejo de Seguridad Económico y Social en el marco de la ONU, encargado de supervisar la calidad social y medioambiental del desarrollo. Teniendo en cuenta los graves desequilibrios y la extrema pobreza que existen en el mundo actualmente, el Congreso se compromete firmemente a luchar para poner fin a la pobreza y las desigualdades, y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio .

6. La crisis económica ha exacerbado la tendencia a reestructurar la producción a escala mundial y está socavando algunos derechos de los trabajadores conquistados tras largas luchas. El Congreso expresa su profunda preocupación ante la creciente tendencia a adoptar formas de empleo precarias, atípicas y no protegidas, que privan a millones de trabajadores y trabajadoras de la cobertura de la legislación laboral y la seguridad social y socavan la capacidad de los sindicatos para organizarlos y negociar colectivamente. El Congreso condena las maniobras desplegadas por los empleadores para evitar sus obligaciones hacia los trabajadores/as, encubriendo la relación de empleo y subcontratando o promoviendo contratos individuales de empleo. Resulta esencial lograr plenos derechos para los trabajadores/as temporales y con otras formas atípicas de empleo, en línea con las disposiciones del Convenio No. 181 de la OIT sobre Agencias Privadas de Empleo y de la Recomendación No. 198 sobre las Relaciones de Empleo. El Congreso subraya que los trabajadores/as deben recibir un salario digno y hace hincapié asimismo en la importancia de establecer salarios mínimos para resistir la presión a la baja sobre los salarios. Pide la ratificación e implementación del Convenio No. 131 de la OIT sobre la Fijación de Salarios Mínimos, así como de la Recomendación No. 135 que la acompaña, como parte de los esfuerzos de campaña desplegados por las afiliadas en todo el mundo para conseguir una remuneración decente para cubrir las necesidades de los trabajadores/as y sus familias. Es lo que podríamos denominar “salario vital” o “salario digno”, y deberá definirse y concretarse en cada país de manera que cubra las exigencias de una vida digna.

7. El Congreso pide a la CSI que prosiga su labor de transformar el sistema comercial mundial en línea con las prioridades de los trabajadores y las trabajadoras, mediante acciones tanto respecto a la OMC como en relación con el creciente número de acuerdos comerciales y de inversión bilaterales y regionales que están siendo negociados en todo el mundo. Los acuerdos comerciales deben brindar un trato justo a los países en desarrollo y eliminar los obstáculos comerciales injustificados que se les imponen, como parte de un esfuerzo integral emprendido por todos los sectores del sistema multilateral a favor del desarrollo sostenible y la creación de trabajo decente. Los servicios públicos vitales –particularmente la educación, la sanidad, el agua, los servicios sociales, los transportes públicos, los servicios de correos y telecomunicaciones, y otras empresas de suministro de servicios públicos esenciales– deben quedar excluidos de las negociaciones sobre la liberalización del comercio y las inversiones, y los gobiernos deberán conservar el derecho de regular y proteger en beneficio del interés público. Los Gobiernos deben disponer del derecho a retirar a dichos servicios de las ofertas en el marco del AGCS sin verse obligados a compensar a otros miembros de la OMC por tales acciones.

8. El Congreso hace hincapié en que el pleno respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores ha de constituir un pilar fundamental del régimen comercial mundial y reafirma su apoyo a la incorporación de una cláusula sobre los derechos de los trabajadores en los Estatutos de la OMC, exigiendo que todos los productos objeto de comercio entre países sean producidos y distribuidos cumpliendo las normas fundamentales del trabajo, lo que constituye un instrumento crucial para la justicia social en un sistema comercial mundial abierto. A tal efecto, ha de fomentarse el desarrollo y la aplicación de sistemas que permitan garantizar la trazabilidad de los bienes, así como de sistemas de verificación que acrediten el respeto de los derechos de los trabajadores/as en

las cadenas de producción y distribución. La OMC debería establecer un grupo de trabajo sobre comercio, globalización, desarrollo y trabajo decente, con la plena participación de la OIT y sus mandantes, a fin de garantizar el respeto universal y vinculante de las normas fundamentales del trabajo. El Congreso apoya asimismo la inclusión de cláusulas laborales efectivas en los acuerdos bilaterales y regionales de libre comercio e inversiones y en los programas de preferencias comerciales.

9. El Congreso constata los peligros que implican los acuerdos de libre comercio y de inversión negociados entre países industrializados y en desarrollo, incluyendo los de Estados Unidos y la Unión Europea con países y subregiones de América Latina como por ejemplo Perú, Colombia o Centroamérica, que podrían comprometer directamente sus posibilidades de desarrollo, además de poner en entredicho otros arreglos regionales alternativos y reforzar las obligaciones antisociales respecto a la propiedad intelectual. La CSI se reserva el derecho a hacer campaña contra dichos acuerdos cuando supongan, de hecho, la aceptación de un historial de falta de respeto a los derechos humanos y sindicales, como es el caso de Colombia. Los acuerdos de libre comercio e inversiones negociados entre países en desarrollo, como los de ASEAN, y otros países como China, podrían también entrañar riesgos significativos de dumping social, por lo que es necesario que se incorporen cláusulas de salvaguardia para proteger a los trabajadores y trabajadoras en caso de producirse un impacto social negativo de la implementación de los acuerdos. El Congreso expresa asimismo su preocupación por el hecho de que los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) entre los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y la Unión Europea (UE), en el marco del Acuerdo de Cotonou, pudieran perjudicar la actual integración económica regional e ir en detrimento de un desarrollo industrial a largo plazo, causar serias pérdidas de empleo, poner en peligro la seguridad alimentaria y privar a los países ACP de ingresos fiscales que resultan vitales para sufragar los servicios públicos y las inversiones. El Congreso pide que los AAE sean renegociados a fin de cumplir con sus objetivos declarados de lograr un desarrollo social y económico sostenible, y favorecer los procesos de integración en las regiones ACP, que deben incluir el respeto de las normas fundamentales del trabajo, concediendo un papel a la OIT en caso de disputa.

Programa de Acción de la CSI

10. El Congreso instruye a la CSI y a sus organizaciones regionales, trabajando en colaboración con sus asociados en la Agrupación Global Unions y sus afiliadas, a:

- (a) Hacer campaña y movilizar el apoyo social y político a favor de un modelo diferente de globalización que contribuya a lograr el trabajo decente, igualdad de género, unos servicios públicos fuertes, una protección social universal, respeto de los derechos humanos incluyendo los derechos fundamentales de los trabajadores/as, una distribución equitativa de la riqueza y una fiscalidad progresiva, un desarrollo sostenible acelerado, mayor igualdad entre países industrializados y en desarrollo, y la eliminación de la pobreza en el mundo;
- (b) Exigir una coherencia política internacional, regulación y gobernanza de la economía global dando un papel destacado a la OIT y a la ONU, con la creación de un Consejo de Seguridad Económico y Social de la ONU, la introducción de reformas profundas en el FMI, el CEF, el Banco Mundial, los bancos regionales de desarrollo y la OMC, de manera que respeten los principios sociales y medioambientales, incluyendo una cláusula sobre derechos de los trabajadores/as basada en las normas fundamentales del trabajo de la OIT, y la renegociación de los AAE de forma que se promueva un desarrollo social, medioambiental y económico equilibrado;

- (c) Insistir en que las instituciones y órganos de la OMC, y los respectivos Gobiernos que en ellos intervienen, apliquen los controles adecuados para garantizar el respeto de las normas fundamentales del trabajo en los procesos de fabricación y distribución de todos los productos objeto del comercio mundial;
- (d) Promover relaciones industriales y la negociación colectiva a todos los niveles y a lo largo de todas las etapas de la cadena de producción, como elementos esenciales para hacer frente al déficit de gobernanza mundial y lograr que las empresas multinacionales contribuyan a una globalización más justa e inclusiva;
- (e) Hacer campaña activamente para que se adopten políticas comerciales e industriales que afirmen la industrialización de los países en desarrollo y combatan el subdesarrollo en general;
- (f) Desarrollar un programa claro que proponga profundas alternativas al fallido sistema de globalización neo-liberal, particularmente para garantizar el pleno apoyo a la industrialización de los países en desarrollo;
- (g) Coordinar acciones sindicales en todo el mundo para el logro de este nuevo orden económico internacional, con una participación destacada de hombres y mujeres de sindicatos procedentes de los países en desarrollo en todas las actividades;
- (h) Proporcionar información regular, llevar a cabo trabajos analíticos y de investigación, apoyar la capacidad de los sindicatos para hacer frente a la globalización mediante asistencia directa para desarrollar programas de formación adaptados a las situaciones nacionales o locales específicas, llevar a cabo investigaciones, y preparar material educativo apropiado sobre las cuestiones tratadas en esta Resolución;
- (i) Instar a todas las organizaciones afiliadas a abordar la exigencia de un salario digno – un salario mínimo vital que garantice un nivel de vida digno – en la negociación colectiva y en otras labores sindicales;
- (j) Apoyar a las organizaciones sindicales afiliadas en la elaboración de propuestas e incentivar su participación en las negociaciones políticas y económicas, con vistas a lograr una mayor integración económica entre los países en desarrollo, garantizando el respeto de los derechos humanos, unas condiciones de vida y de trabajo adecuadas y la participación de los interlocutores sociales, a fin de lograr relaciones comerciales más equilibradas y facilitar el crecimiento y el desarrollo;
- (k) Asegurarse de que las políticas y acciones de la CSI aborden la protección de los derechos e intereses de todos los trabajadores y trabajadoras, incluyendo aquellos y aquellas con formas de empleo precarias, atípicas y no protegidas tanto en el sector formal como en actividades económicas informales;
- (l) Cuando resulte apropiado para alcanzar objetivos sindicales, fortalecer las relaciones con aliados políticos y con movimientos y organizaciones de la sociedad civil que compartan las preocupaciones, los valores y los objetivos de la CSI, basándose en el respeto mutuo del papel específico y la independencia de cada uno.